

—— PASADO Y PRESENTE DE LAS IZQUIERDAS

Anotaciones a la política del Partido Comunista*

Por Álvaro Delgado**

* Artículo recibido en marzo de 2008.

Artículo aprobado en mayo de 2008.

** Investigador del Cinep

Introducción

El Partido Comunista Colombiano fue fundado en julio de 1930 como una prolongación o desprendimiento del Partido Socialista Revolucionario (PSR) que había operado en la segunda mitad de los años 20 y se había extinguido antes de terminar ese decenio. A nuestro modo de ver, su trayectoria presenta cuatro momentos principales:

- a) su emergencia, coincidente con la reconquista del poder político por parte del Partido Liberal, y por ende su importante protagonismo en los años 30, sobre todo alrededor de la resistencia popular frente a los efectos de la crisis económica mundial, la lucha campesina por la tierra y la erección (1936) de la primera organización obrera nacional estable, la Confederación de Trabajadores de Colombia;
- b) su largo y difícil tránsito bajo los gobiernos reaccionarios entre mediados de los años 40 e inicios de los 60, que lo ubicó claramente en la oposición al régimen establecido por los dos partidos tradicionales;
- c) su desenvolvimiento notable al calor de la movilización popular desarrollada en el Frente Nacional, que tiene como momentos simbólicos el auge

del movimiento sindical y popular, la aparición y desarrollo del actual conflicto armado interno y la proyección política de las alianzas electorales de izquierda;

- d) la operación del partido en las condiciones de la globalización internacional a partir de la desaparición del llamado “campo socialista”.

La presente semblanza es extraída de una visión más extensa del lapso corrido entre la caída de las dictaduras de derecha a fines de los años 50 y el decenio de los 90.

Sobre la composición social del partido

El PCC, desde luego, no es un partido electoral, como el liberal y el conservador. Además, no ha podido ser una agrupación de masas, como ellos, en general, lo han sido. Aunque la labor ideológica, y sobre todo proselitista, del bipartidismo se ha apoyado siempre en las organizaciones populares de la ciudad y el campo, su más importante tribuna ha sido el aparato político, administrativo y financiero del Estado, el uso monopólico de los medios de comunicación masivos, las contribuciones del gran capital privado, la cobertura de legalidad con que han contado siempre sus actividades entre la población y frente a la opinión pública. Los comunistas nunca han poseído ese tipo de instrumentos de penetración ideológica y propaganda política. Como no son una agrupación de caudales electorales, han estado obligados a recurrir con mucho mayor ahínco a las organizaciones populares. Introducirse en las ya establecidas y crear nuevas agrupaciones ha sido el conducto casi único para adelantar su actividad partidaria. Sindicatos de asalariados, organizaciones agrarias y estudiantiles y aparatos de alianzas electorales con otros movimientos o grupos políticos han sido los principales escenarios de la presencia política de los comunistas colombianos. En menor grado, asociaciones ciudadanas barriales y veredales —principalmente juntas de acción comunal y comités aparecidos al calor de luchas populares concretas—, ONG de derechos humanos, coo-

perativas agrarias (que desempeñaron importante papel durante la tregua de la lucha pactada con las Farc) y, como rasgo distintivo, asociaciones de mujeres y juristas, que son una constante del partido desde la época de clandestinidad de los años 50. Los miembros o los simpatizantes del partido que han logrado acceder a los puestos de representación popular solo han tenido capacidad propagandística en el Congreso de la República; en las instancias menores ediles, concejales, alcaldes y gobernadores de inspiración marxista diluyen sus atributos bajo la enorme presión del establecimiento ideológico y burocrático del Estado. No hay una expresión “callejera” del partido, de tumulto barrial o congestión de espacios parlamentarios, como ha pasado con los dos partidos tradicionales a lo largo de su historia, entre otras razones por el carácter subversivo que siempre ha revestido entre nosotros la actuación de la izquierda. Los hilos de la actividad comunista corren solamente a través de organizaciones populares.

Las organizaciones de jóvenes y de mujeres fueron siempre concebidas en el partido como expresiones no partidarias, no enseñoreadas por la ideología marxista, inspiradas en ideas democráticas, receptoras de diversidad de creencias ideológicas y dotadas de autonomía organizativa. En la práctica, sin embargo, el diseño no ha concordado con la realidad. La Juventud Comunista ha sido más una ayudantía del partido que una organización amplia de la juventud, y la Unión de Mujeres Demócratas ha sido utilizada más como madre sustituta de los actos públicos partidarios que como núcleo de formación de mujeres libres, desatadas de la coyunda familiar y comprometidas con su dignidad de ciudadanas universales. El acercamiento a los jóvenes y las mujeres ha estado interferido por la instrumentalización de sus inquietudes. El partido, de todas maneras, tiene claro que la lucha de las mujeres es al lado de los hombres y no contra ellos, como la conciben el feminismo y ciertos debates de género, y es ajeno a las demandas de género de las mujeres cuando estima que tales aspiraciones empobrecen la función política de mujeres y hombres.

La instrumentalización de las organizaciones sociales, inspirada en las tesis leninistas de fines del siglo diecinueve, cuando el analfabetismo y la incultura

eran abrumadoramente dominantes en el movimiento social, ha sido funesta para crear soportes populares de las políticas de izquierda. En el informe político rendido al XIII Congreso del PCC (diciembre de 1980), el secretario general, Gilberto Vieira, sostenía sin ambages: “La independencia de los sindicatos de los partidos es absoluta en lo que se refiere a los partidos de la burguesía, como es obvio. Pero en relación con el Partido Comunista, partido del proletariado, esta independencia es orgánica pero no ideológica ni política. Los sindicatos, organismos de masas de todos los trabajadores, deben ser al mismo tiempo escuelas de formación revolucionaria” (*Documentos Políticos*, 1980, No. 144-145, p. 75). Los demás grupos marxistas hacían similares estimaciones.

Con todo eso, penetrar en las filas de la clase obrera ha sido siempre la “tarea principal” del PCC, así esa clase social fuera notoriamente minoritaria y socialmente débil, y la incapacidad permanente de llevar a cabo ese cometido provocó un exceso de autocrítica al respecto desde los primeros años de su existencia. La debilidad del partido en el mundo urbano —que es el de la clase obrera— era evidente en el caso del movimiento obrero de los años 50, que había desaparecido en varios departamentos por obra del régimen intolerante de Laureano Gómez (PCC, 1952, 21). En agosto de 1956 la dirección partidaria pintaba así las cosas: “Es evidente que en todos nuestros documentos se habla de la necesidad de ir a la clase obrera, de la necesidad de conquistar las grandes masas proletarias, de hacer una política de masas, pero hay que decir que eso no pasa de ser una consigna de carácter agitational, que no se convierte en una tarea efectiva (...) por la falta de una concepción suficientemente clara y precisa del papel de la clase obrera en la revolución colombiana” (*Documentos Políticos*, 1956, No. 1, p. 21) Es una sentencia que se repetirá en la trayectoria posterior del partido. Más que debido al escaso desarrollo de la clase obrera industrial en nuestro medio, se creía que el partido no penetraba en las filas obreras debido a la falta de “perseverancia y paciencia verdaderamente revolucionaria” para hacerlo (PCC, 1956a). El partido admitía que era responsable de “errores graves que han contribuido al debilitamiento del movimiento obrero” y que eso no había hecho otra cosa que servir a “intereses reaccionarios”:

“Esa política de sometimiento a los intereses de la burguesía liberal fue lo que durante mucho tiempo dio lugar a que nuestro partido estuviera pendiente de las exigencias de los sectores derechistas del liberalismo para procurarle concesiones en el movimiento sindical, que en muchas ocasiones iban más allá de las propias aspiraciones de los liberales” (*Documentos Políticos*, 1956, No. 1, p. 22), añadía el documento.

Alvaro Vásquez, segunda figura histórica más importante del partido –y que en 1991 reemplazó por corto tiempo a Vieira en la secretaría general–, aludía a ese desafío cuando en un informe rendido a otra reunión plenaria del CC (agosto de 1978) hizo referencia a los bajones experimentados por el partido en las elecciones presidenciales de 1974 y 1978 y a la tesis de la “desaparición” de la izquierda tradicional que esgrimieron entonces algunos sectores políticos. Vásquez expuso el asunto con estas palabras: “una cosa es el nivel reivindicativo y otra el político. La consolidación de una conciencia política de la clase obrera no se realiza ni inmediata ni automáticamente. Sigue caminos complejos y contradictorios. Creer que basta con la lucha por las reivindicaciones económicas inmediatas para que ésta se exprese en una posición revolucionaria –que implique dar el voto por los comunistas y sus aliados y no por una corriente amorfa– es una vieja concepción oportunista” (*Documentos Políticos*, 1978, No. 132, p. 9). Ese camino, sin embargo, parecía no estar destinado para todos. En referencia a los acercamientos de la izquierda latinoamericana con los pueblos del continente Carlos M. Vilas sostiene que “Salvo en Chile y Uruguay, ni los obreros votaban mayoritariamente por partidos socialistas o comunistas o por coaliciones de las que éstos participaran, ni esos partidos o coaliciones tenían en el voto o la afiliación proletaria sus contingentes predominantes. En lo que toca a los sectores populares, la política latinoamericana fue y en gran medida sigue siendo política de masas más que de clases” (*Nueva Sociedad*, 1998, No. 157, p. 66).

La ausencia histórica de partidos democráticos en el medio colombiano ha dificultado grandemente esa tarea porque los sectores populares no han podido “ver”, experimentar en la realidad y ponderar diversas propuestas de

progreso, no propiamente formuladas (caso de Antonio García y su estrecho grupo de intelectuales, por ejemplo), sino principalmente puestas en marcha por agrupaciones de carne y hueso, duraderas, inspiradas en la democracia y el socialismo. La socióloga Rocío Londoño escribía en 1980 que por la ausencia en nuestro medio de partidos socialdemócratas “en el país no se dio un desarrollo significativo del pensamiento socialdemocrático premarxista” (*Documentos Políticos*, 1980, No. 143, p. 45).

La izquierda colombiana de los años sesenta presentaba sin embargo características comunes, compartidas durante años y que el rompimiento de sus filas no borró con el tiempo. Esa izquierda se ha prefigurado un país de pequeños propietarios rurales (pobres del campo) y unas masas proletarias urbanas cada vez más numerosas en las cuales la revolución colombiana debe encontrar sus principales soportes¹. Pero a principios de los sesenta el dinamismo de la lucha todavía privilegiaba lo rural. El autor de este capítulo extendía un tanto esa reflexión en escrito de octubre de 1989: “El Moec, el Fuar, el PC-ml, el Frente Unido, el M-19, el PRT, lo mismo que núcleos de tendencia socialdemocrática como el Movimiento Firmes, no lograron arraigar en las áreas urbanas y fracasaron en el intento de convertirse en la organización de masas que el PC no había podido configurar (...) En los años 80, mientras se fue extinguiendo la expresión urbana de no pocas corrientes de izquierda, en las organizaciones guerrilleras fueron ascendiendo las tendencias militaristas y ganando espacio el menosprecio de la lucha política y del papel de los trabajadores y de sus organizaciones civiles (...) El intento más acabado de recuperación del proyecto democrático ha sido la Unión Patriótica, que no ha logrado arraigar porque no encontró a una izquierda organizada en las ciudades. Solo estaban los comunistas y las todavía más reducidas organizaciones clandestinas ligadas al movimiento guerrillero. No hay duda de que la relativamente baja movilización popular contra la guerra sucia se explica en primer término por la debilidad de los sectores de izquierda en las áreas urbanas” (*Margen Izquierda*, 1989, No. 41, p. 17-18). Obsérvese que el grueso de la izquierda (PC, ELN, M19) buscó

¹ Para 1964 las cifras oficiales establecían que la población urbana era ya el 52% del total nacional.

siempre cristalizar en el campo, y para el caso del PC sus asientos principales, casi cinco décadas después, siguen estando allí; el símbolo más acabado de la izquierda urbana (Camilo Torres Restrepo) se va a combatir al monte cuando el movimiento urbano está en alza, y el resultado es que su propio núcleo de luchadores urbanos desaparece conjuntamente con su héroe; el M-19, en su búsqueda de escenario, se marchó de la ciudad al campo; el ELN afianzó sus fuentes de financiamiento industriales en el campo, no en la ciudad; las Farc terminan enquistadas en el negocio campesino de la coca y en las zonas urbanas apenas logran convertirse en factor de actos terroristas.

La izquierda comienza a conquistar el mundo ciudadano con la insurgencia del M-19 en los años 70 y en una segunda oportunidad con la aparición de la Unión Patriótica a mediados del decenio siguiente. De labor urbana persistente, confiada en sus propias fuerzas y con ganas de hacer la experiencia de movilizar políticamente al sector social más comprometido con el futuro del país solo es dable hablar a partir de la configuración del Polo Democrático a fines de los años 90. Lo que queremos significar con estas consideraciones es que ese ha sido el camino seguido por la izquierda colombiana para preparar su gran encuentro con el factor determinante del momento histórico que vive la humanidad: la conquista de los dominios de la democracia.

El otro asunto importante referido al mundo social urbano toca, en nuestro sentir, con los intelectuales. Por un lado, sostuvimos “El dogmatismo de los líderes estudiantiles de los años 60, la afluencia de núcleos de la pequeña burguesía radical y sectaria a las directivas sindicales en los años 70, el estilo de lucha y trabajo intolerante que las agrupaciones de izquierda impusieron dentro de sus filas, todo ello corrompió hondamente el equipamiento político de los trabajadores a través de una intelectualidad combativa y lúcida” (*Margen Izquierda*, 1989, No. 41, p. 19). Por otro lado, estimábamos que “Los intelectuales de izquierda colombianos –como ocurrió en general con la intelectualidad progresista de los países capitalitas– sintieron la necesidad de la *perestroika* mucho antes de hoy, desde fines de los años 60, pero ello ha provocado en las filas de la izquierda más resistencia que simpatía. Al poner en debate el sistema

socialista, los intelectuales se tornaron sospechosos para la izquierda. Hoy el distanciamiento sigue en firme, y solamente el desarrollo de una apertura democrática de la izquierda podrá reanudar los enlaces perdidos” (ibíd.).

Había una denegación de la democracia en las “formas de hacer la política a través de la imposición”, como afirmaba Darío Fajardo (*Izquierda*, 1992, No. 2, p. 5), al tiempo que añadía: “el desarrollo del pensamiento económico, histórico y sociológico de los años sesenta y setenta tiene una deuda con los intelectuales marxistas. Sin embargo, en este mismo periodo se profundizó una ruptura en la cual inciden numerosos factores de índole política, económica, etc., pero a la cual no son ajenas formas de dirección autoritarias: en este proceso, el credo político se hizo disculpa para ejercer poderes, muchas veces pequeños poderes, guiados por resentimientos con quienes eran capaces de pensar o ver de manera diferente” (ibíd.).

El partido, preocupado por los pocos avances en el mundo del trabajo material, no sopesaba mayormente la importancia de los intelectuales en sus filas y les tenía más desconfianza que credibilidad. En la segunda mitad de los años 80 la dirección partidaria marginó de sus filas —en silencio las más de las veces— a los descontentos por la intolerancia y la falta de democracia, y cerró intempestivamente la revista *Documentos Políticos*, que había nacido en la clandestinidad durante la dictadura rojaspinillista y subsistido sin tregua desde 1957 —caso insólito en la vida colombiana—, clausuró igualmente la revista teórica *Estudios Marxistas*, desalojó abruptamente del Ceis a la plana directiva y sus principales investigadores que venían haciendo labor desde 1972, y llegó al extremo de exigir a Bernardo Jaramillo que depusiera su candidatura a la presidencia de la república, alegando sus ligazones políticas con el M-19 recién reinsertado a la vida civil. En ese golpe cayeron igualmente Diego Montaña Cuéllar, Alberto Rojas Puyo, Angelino Garzón, Gustavo Banguero y otros destacados elementos de la UP que habían hecho esfuerzos por ampliar el carácter de esa coalición de fuerzas políticas, hasta llevarlos a crear la Alianza Democrática-M19. Intelectuales creativos, como Nicolás Buenaventura, Medófilo Medina y Rocío Londoño —para no mencionar sino tres— acumularon

suficientes motivos para dejar las filas partidarias, mientras decenas de profesionales, economistas, abogados, periodistas, escritores, artistas, se apartaron de la militancia vencidos por la intolerancia política y sobre todo la capitulación de la dirección partidaria ante las tendencias militaristas acogidas por la guerrilla.

La desbandada intelectual de los años 90 fue la segunda más grave en la vida del partido, después de la que se presentó como efecto del ascenso de la violencia política desde mediados de los años 40 hasta la implantación del Frente Nacional en 1962. Pero, a diferencia de la primera, en la de fines del siglo pasado el resorte principal no fue el agravamiento de la represión gubernamental sino el copamiento de las filas partidarias por la intolerancia política y la decapitación de las normas democráticas que presidían la vida interna del partido —virtudes que, hay que recordarlo, tampoco fueron practicadas en el seno de los partidos tradicionales—. La violencia del Medio Siglo sacó del camino a decenas de luchadores y simpatizantes del socialismo y se cebó en un número reducido de activistas, en un escenario desprovisto de derechos, oportunidades legales y expresiones organizadas de resistencia civil. La ola de violencia que comenzó a mediados de los años 70 y no ha desaparecido treinta después segó la vida de centenares de valiosos cuadros y activistas de izquierda que desarrollaban una lucha civil en las condiciones de un conflicto armado interno acompañado por el crecimiento hasta entonces desconocido de movimientos sociales, instrumentos legales y constitucionales, agrupaciones de derechos humanos, prensa alternativa, vigilancia de organismos públicos internacionales y libertades de información y desplazamiento que eran impensables en los años 50 del siglo pasado. No es que el partido se diera a la tarea de expulsar a nadie de su seno. Las cohortes intelectuales abandonaron el camino partidario cuando sintieron que no cabían en las nuevas condiciones de una organización supeditada a un movimiento guerrillero que olvidó sus compromisos con la población civil y se alió con paramilitares y delincuentes comunes para negociar la posesión de cuerpos humanos, se ligó a los negocios del narcotráfico, ordenó el desplazamiento de poblaciones enteras y acudió al asesinato de personas inermes ajenas a la confrontación armada.

El partido y la lucha armada

Antes que un examen puntual del problema de la lucha armada interna del país y del papel que en ella han venido cumpliendo las Farc, como agrupación creada por el Partido Comunista, pretendemos hacer consideraciones sobre algo menos minucioso: de qué manera la violencia y las acciones de fuerza han incidido en el programa social y político de los comunistas, más que de las izquierdas en su conjunto.

La resolución del Comité Central que el 22 de octubre de 1949 ordenó a su militancia la formación de comités de autodefensa allí donde fuera necesario para enfrentar la violencia latifundista planteó “al proletariado y al pueblo la necesidad de defenderse, replicando a la violencia de los bandidos fascistoides con la violencia organizada de las masas” (*Estudios Marxistas*, 1975, No. 10, p. 5). La autodefensa campesina no es despliegue de violencia contra los enemigos sino resistencia organizada contra la violencia oficial. La temprana cercanía del partido con las formas de lucha ilegales —impuesta por los gobiernos represivos bajo los cuales se desarrolló— lo convirtió en víctima principal de las persecuciones entre los grupos políticos nacionales. Su compromiso raizal con la revolución soviética lo llevó a trabajar denodadamente por la paz mundial en los años 50, en medio de la Guerra Fría, en el interés de defender la construcción pacífica del socialismo en Europa y Asia. Cuando en 1957 se produjo el derrumbe de la dictadura rojista, los comunistas denunciaron a los grupos que abogaban por la revancha contra los conservadores por parte de los liberales que regresaban a sus tierras arrebatadas por aquéllos, así como a las agrupaciones de bandoleros estimulados por los grandes propietarios de tierras en algunos lugares, como Quindío y Tolima. Fueron comunistas quienes convencieron a liberales y conservadores de unirse para garantizar la preservación de la tranquilidad en las provincias de Sumapaz y Tequendama por decenas de años. Las “repúblicas independientes” no estaban en guerra contra nadie y no eran un movimiento guerrillero (no es sino hacer una comparación con la guerrilla de hoy). “Generalizando las grandes experiencias de nuestro pueblo y de nuestro partido debemos poner como base fundamental de la lucha contra la violencia la acción

múltiple de las masas, hasta convencerlas de que ellas mismas y por su propia acción deben defenderse, expulsando y cerrando el paso a los enemigos de la paz”, conceptuó el informe político rendido al 22° pleno del Comité Central reunido en 1959². La solución de la violencia que pregonó el partido no fue contestar con más violencia sino hacer la reforma agraria democrática.

El viraje de la Iglesia hacia posiciones protectoras de los derechos humanos y la tolerancia, hecho público sobre todo a partir de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 1968, quitó respaldo moral a la violencia, sobre todo en su expresión anticomunista, y la aparición de sectores eclesiales democráticos y aun revolucionarios acabó por destruir el muro de apoyo con que habían contado los gobiernos dictatoriales del país. Sobrepasadas las declaraciones de sectarismo y anticomunismo hechas por la jerarquía eclesíastica, a fines de los años 60 el pleno comunista de octubre de 1969 no dejó pasar por alto los cambios operados en las posiciones de las fuerzas sociales. “Uno de estos signos es la incorporación de ciertos sectores del clero católico a las luchas populares”, manifestó, al mismo tiempo que estimaba que había “síntomas de descontento en grupos de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, que expresan inquietudes y preocupaciones por la suerte del país y por el papel que la oligarquía les ha asignado como verdugos del pueblo” (*Voz Proletaria*, 16 de octubre de 1969, 6).

Todo eso tenía una explicación. La llamada Declaración de los Doce Partidos Comunistas del campo socialista, hecha en 1957 con motivo del 40° aniversario de la revolución soviética, estableció los siguientes postulados: a) vivimos la época de sustitución del capitalismo por el socialismo; b) estamos en la época de “coexistencia pacífica de los dos sistemas sociales”; c) la relación de las fuerzas militares del mundo hace posible impedir la guerra mundial. Por lo tanto, y de acuerdo con las determinaciones del XX Congreso del Pcus, realizado el año anterior, la vía pacífica era el camino que llevaba al socialismo sin necesidad de la lucha armada.

² Publicación en folleto, sin fecha, p. 4.

Las sorpresivas decisiones del XX Congreso nunca fueron suficientemente convincentes para el PCC, que a lo largo de los años 60 y 70 soportó el mayor peso político del ascenso de las formas de lucha violenta en el territorio nacional, y en el decenio de 1980 las Farc, que estaban en pleno despliegue de su plan dirigido a convertirse en un Ejército del Pueblo³, revivieron ese sentimiento con mayor fuerza. Para una buena parte del partido la vía pacífica de la revolución reñía con la tesis de la dictadura del proletariado, posible de ser instaurada solo por la fuerza o por lo menos con la hegemonía del partido, sin aliados en el poder. Ese fue el núcleo del enfrentamiento que sobre las formas de lucha hubo en el Comité Central entre el secretario general, Vieira, y el sector amigo del uso de la fuerza representado por Manuel Cepeda. El debate se prolongó por años pero siempre fue zanjado mediante una fórmula conciliadora dual: a) la toma revolucionaria del poder en Colombia recorrerá un camino caracterizado por el empleo de todas las formas de lucha, incluidas las armadas; b) sí, hay que seguir el camino pacífico, pero en el último tramo siempre será necesaria la lucha armada. Recuérdese que China, que tenía sus propios planes estratégicos, no aceptó la directiva de la vía pacífica y siguió alineada con las concepciones estalinistas que le habían dado el triunfo en 1949.

Aunque el X Congreso del partido (enero de 1966) no afirmó que la confrontación armada era la principal forma de lucha sino “una de las formas más elevadas de lucha de masas”, sostuvo que “La combinación adecuada de todas las formas de lucha de masas es y será seguramente la esencia misma de toda nuestra táctica. Pero a medida que se profundice el conflicto de clases y avance el movimiento de liberación nacional, ante la represión y la creciente intervención del imperialismo yanqui, la lucha armada popular se convertirá en la forma principal, como factor decisivo para la toma del poder por el pueblo.

³ Tanto el PC como la dirección de las Farc consideró siempre como un error no haberse adelantado a presentarse a los colombianos como Ejército, cosa en que les habían ganado de mano los grupos armados castrista y maoísta. Por eso decidieron incrustar la nueva marca al lado del nombre ya establecido, con la esperanza de prescindir del inicial y utilizar el nuevo en el momento que considerasen adecuado.

De hecho, en las zonas agredidas en desarrollo de los planes de los militaristas yanquis, la acción guerrillera se ha convertido en la forma principal de lucha de las masas campesinas” (PCC, 1966, 65).

Hay que tener en cuenta el concepto de lucha armada (guerrillera) que han manejado los comunistas colombianos, por ser ellos quienes con mayores calidades y eficacia han conducido su desarrollo. “Las luchas guerrilleras no han sido creadas artificialmente ni responden a planes determinados sino que son el resultado natural de la lucha de los campesinos para defender sus vidas y sus bienes de las acciones vandálicas desatadas por la dictadura, que ha renunciado a toda posibilidad de gobernar por medios pacíficos y democráticos. El partido comunista considera justa la acción armada y la lucha guerrillera de los campesinos, como una expresión de la autodefensa de las masas y como una modalidad importante en las formas de lucha del pueblo colombiano contra la barbarie oficial (...) Pero al mismo tiempo rechaza y condena todas aquellas acciones que impliquen asesinatos, robo y pillaje, así como la anarquía y desesperación que conducen a acciones aventureras, a la ampliación artificial de esa lucha y a la agravación de las condiciones materiales y políticas del campesinado”(PCC, 1956b, 8).

Ahora bien, desde fines de los años 60 se produce una “ampliación no artificial” de la lucha guerrillera. La represión al PC y la UNO toma nuevo impulso en 1975 y tiene como escenarios principales a las regiones campesinas de Cimitarra, Yacopí, Puerto Boyacá y Urabá, donde Ejército y paramilitares emprenden el desalojo de las posiciones ganadas por las Farc. Un documento partidario afirma que “con el pretexto de combatir a las guerrillas revolucionarias que no pueden derrotar, ciertos elementos militares han lanzado a la tropa en feroces ofensivas contra el campesinado de Cimitarra. Los concejales de la UNO han sido arbitrariamente detenidos y se ha intentado montar contra ellos consejos de guerra para cumplir la amenaza del coronel que notificó públicamente que no permitiría el funcionamiento del concejo municipal de mayoría comunista. Centenares de campesinos han sufrido crueles torturas en la base militar de ese municipio. Algunos oficiales verdugos han hecho

fusilar a los compañeros Antonio Galvis Rodríguez, Misael Ramírez y Moisés Guzmán” (*Documentos Políticos*, 1977, No. 123, p. 92). Las cosas tomaron un cariz tan agresivo, que la Corte Suprema de Justicia se vio precisada a declarar inconstitucionales varias medidas gubernamentales adoptadas aprovechando el estado de sitio (*ibíd.*).

Entre ellas aparecía el Decreto 2132, que pretendía privar de licencia de trabajo a los profesionales que intervinieran en acciones de protesta contra la política oficial, como ocurría con médicos y odontólogos del Instituto de Seguros Sociales; el Decreto 2194, que daba a comandantes de brigada autorización para castigar con tres años de prisión a quienes portasen armas o municiones; el 2195, que confería a comandantes de policía la facultad de condenar hasta por seis meses a quienes fueran “perturbadores del orden” por participar en reuniones públicas no autorizadas o por escribir consignas en las paredes. Incluso el Decreto 2578 creó una “caución de buena conducta” hipotecaria, prendaria o personal, para ciudadanos que “por sus antecedentes, actividades, hábitos o formas de vivir” no ofrecieran confianza a las autoridades. Ya para entonces el mayor del Ejército Ñungo y el general Camacho Leiva, reconocidos extremistas de derecha, habían prohijado el cambio de la tesis de presunción de inocencia por la de presunción de culpabilidad, mientras la tortura de prisioneros (conocida como “vía uruguaya”) se iniciaba formalmente en septiembre de 1978 con la expedición del llamado Estatuto de Seguridad, que revivió las formas del Acto Legislativo No. 6 de 1954, dictado por la Asamblea Nacional Constituyente del general Rojas.

La violencia enderezada contra el PC y la UP en los años 80 y 90 estuvo atravesada de importantes movilizaciones populares en diferentes regiones, mayores que en cualquiera etapa anterior, y contó con persistente y a veces heroica resistencia del pueblo: foros, seminarios, jornadas nacionales e internacionales de solidaridad con las víctimas, denuncias ante organizaciones internacionales de todo tipo, tribunales populares, huelgas de trabajadores... Todo ello combinado con acciones de indígenas y negros, paros cívicos urbanos, tomas de

tierra, marchas regionales, protestas de orden ecológico y hasta movilizaciones en la lejana isla de San Andrés.

La guerrilla, naturalmente, saludó esas acciones como parte de la resistencia popular al sistema imperante y renovó, con un énfasis tal vez no conocido hasta entonces, su compromiso con una solución pacífica del conflicto. En mensaje enviado al Encuentro Obrero, Campesino y Popular realizado en Bogotá en marzo de 1985, afirmaba: “Las Farc-EP desean, en tan destacada tribuna, renovar sus proposiciones democráticas a la faz del país, reclamar la apertura que el pueblo ansía y urgir por que las reformas políticas, sociales y económicas que el gobierno del presidente Betancur se ha comprometido a concretar dejen de ser meros enunciados vacíos para pasar a convertirse en realidad. De este sitio queremos extender el llamado de las Farc-EP a nuestros compañeros del M19, del EPL y del ADO para persistir en la política de unidad que desde años atrás anunciamos y que fue recibida con inmenso alborozo por todo nuestro pueblo. Y extendemos a los combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) nuestra exhortación para que unamos energías y caminemos juntos por la vía de proponerle al país y al régimen una política de unidad popular y cambios profundos, que signifique una derrota para la violencia fascista” (*Margen Izquierda*, 1985, No. 1, p. 27).

La dirección comunista hizo esfuerzos para remover todo pretexto de retaliación contra las organizaciones, particularmente las sindicales, que proclamaban con excesivo entusiasmo su apoyo a la acción guerrillera. Por conductos internos se hizo circular el pedido de que las organizaciones sociales refrenaran sus expresiones públicas de solidaridad con ese tipo de lucha, y en el informe de organización rendido ante el X Congreso Comunista (1966), Álvaro Vásquez advirtió claramente: “La experiencia nos ha enseñado que, en las condiciones actuales, la organización en el campo puede avanzar si la situación en la región permite el tipo de organización legal y abierta y si se toman las banderas reivindicativas y unitarias que sean capaces de incorporar a muchos trabajadores y de no atraer de

inmediato la represión del enemigo. Pero querer legalizar sindicatos agrarios que desde la sesión de instalación levantan la solidaridad con la lucha armada y acusan al Frente Nacional de todos sus crímenes, es una falta de apreciación del momento que se vive en Colombia” (PCC, 1966, 72). Incluso Vásquez, hábil manejador de la paradoja, inventaba reflexiones jocosas, como esta sobre la pasividad y el oportunismo de la militancia: “Muchos camaradas consideran que la revolución es algo para generaciones venideras, por lo cual no hay que correr mucho ni matarse demasiado. Hay otros que justifican la pasividad con frases ultraizquierdistas, alegando que solo vale la pena actuar en la lucha armada, por lo cual, y en vista de que en su respectiva localidad no hay esta lucha, más bien se aguantan las ganas” (ibíd., 82).

El recrudecimiento de la violencia ocurría mientras estaba en marcha una amplia discusión en torno de la demanda surgida en algunas instancias partidarias sobre la necesidad de cambiar la tesis de la combinación de las formas de lucha. “es necesario condenar las acciones aventureras que se cometen con pretextos de esta lucha, así como los actos terroristas aislados, los secuestros y acciones con que algunos grupos tratan de sustituir la acción de las masas” (*Documentos Políticos*, 1980, No. 144-145, p. 55), opinaba el partido al oído de la comandancia “fariana”. Y agregaba: “Si no es posible crear determinadas formas de lucha por decisión simplemente política de un partido, tampoco es posible perpetuarlas cuando las circunstancias cambian y exigen otras formas de lucha” (ibíd.). A principios de los años 90 el partido formuló una nueva consideración respecto del secuestro, frente al cual señalaba que la guerrilla tenía motivaciones políticas más que sociales para adelantarlos: “una posición realista implica al mismo tiempo la crítica seria y argumentada a prácticas de grupos guerrilleros que nada tienen que ver con sus motivaciones y objetivos, como son los secuestros y las acciones que lesionan los intereses sociales de la población. La credibilidad y la autoridad del movimiento armado solo podrán elevarse si tal tipo de conductas se erradican definitivamente del cuadro de sus acciones” (PCC, 1993, 3). Ya en la entrevista que concedió a Marta

Harnecker en 1988 Vieira había pronunciado significativamente estas palabras: “Criticamos, por principio, los secuestros, que llevan a la opinión pública a confundir a los guerrilleros con los delincuentes comunes. No condenamos las tomas locales ni los sabotajes, aunque consideramos que en la práctica de este método deben tomarse en cuenta los sentimientos y los intereses de las regiones y de la población civil” (Harnecker, 1989, 81).⁴

Por lo demás, el informe presentado al pleno del Comité Central reunido en abril de 1982 hacía esta reflexión sobre las acciones aventureras del M-19: “Tenemos que decirlo claramente: los actos terroristas han jugado en contra de la izquierda, han contribuido a restarle apoyo electoral, a fomentar el escepticismo y el abstencionismo, porque los medios de comunicación de masas, controlados por el poder y la reacción, han revuelto, en el territorio indiferenciado de la ‘izquierda’, al M19, al partido comunista, al Frente Democrático. Y nuestra actividad ideológica no ha sido lo suficientemente constante e incisiva para efectuar oportunamente los deslindes necesarios ante la táctica asombrosamente fanfarrona y peligrosa del M19, máxime cuando esta organización, desde hace tiempo, ha agudizado la crítica contra la unidad, la apertura democrática y la solución de la crisis política por un camino diferente al de la aventura y al de la guerra civil” (*Documentos Políticos*, 1982, No. 150, p. 11). El sermón a sus futuros aliados en el propósito de cambiar el país por el camino de la lucha civil terminaba con estas palabras: “Para los revolucionarios la respuesta al terrorismo gubernamental y militarista no puede ser el terrorismo y las acciones anarquistas e individuales, sino la movilización y la organización muy amplia de las masas y el desarrollo de una política de autodefensa de masas que sea capaz de contener y desenmascarar la acción criminal de los aparatos paramilitares, como los escuadrones de la muerte o el llamado MAS” (ibíd., 11-12).

⁴ En el presente los activistas –militantes y no militantes comunistas– que se mueven en torno a las posiciones de las Farc se fastidian cada vez que voceros del PDA afirman forzosamente –siempre de manera tangencial y bajo formas escuetas– que ese movimiento no es partidario de la lucha armada colombiana.

Las propias Farc condenaron públicamente el secuestro en diferentes ocasiones de los años 70 y 80, y el acuerdo entre la Comisión de Paz y esa guerrilla suscrito el 28 de marzo de 1984, previo a la declaración de la tregua de las acciones, establecía que “Las Farc-EP condenarán y desautorizarán nuevamente el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas y contribuirán a que termine su práctica, como atentados que son contra la libertad y la dignidad humana” (*Documentos Políticos*, 1984, No. 158, p. II). Analizando la ofensiva militar y política encaminada a que el movimiento popular se entregara “sin ningún aporte a la democratización del país”, el partido hablaba de que “El objetivo declarado y aparente de esta ofensiva es el movimiento guerrillero y hechos tan condenables e injustificados como los secuestros, parte de los cuales sigue acompañando como una funesta sombra a ese movimiento, a pesar de las condenaciones expresas de sus dirigentes” (*Documentos Políticos*, 1984, No. 157, p. 4).

Una vez firmada la tregua con las Farc el 28 de marzo de 1984, en los meses siguientes y hasta fines del año ya sumaban 70 los asesinados entre dirigentes y activistas de la UP, nuevas sedes políticas del movimiento habían sido dinamitadas, se presentaban constantes violaciones del cese el fuego por parte de las Fuerzas Armadas, ocurría poco después el asesinato de Oscar William Calvo, máximo dirigente del EPL, y de Ricardo Lara Parada, ex combatiente del ELN y fundador del Frente Amplio del Magdalena Medio, y se había producido la destrucción parcial de la sede del Comité Central comunista en Bogotá y, para que no quedaran dudas del curso que tomaban los acontecimientos, se había presentado la cruenta toma del Palacio de Justicia por el M-19 y la criminal respuesta de los mandos del Ejército. A fines de 1987 el país conoció los asesinatos de Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur, el profesor Luis Felipe Vélez y cuatro congresistas de la UP. La máquina de la muerte que provocó el desmoronamiento de la tregua del 84 es culpable principal del fracaso del proceso de paz a partir de entonces. Allí no había duda: se había puesto en marcha un plan sangriento y frenético para impedir que los sectores ligados a la subversión y la izquierda civil llegaran a compartir el poder del Estado. Y esa sed se encontró con las ganas

de beber del movimiento guerrillero, que no creía ya en la solución pacífica del conflicto.

El gobierno se equivocó al presagiar, luego del acogimiento de la AD-M19 a la lucha civil, que las Farc se debilitarían y terminarían por entregarse como producto de nuevas negociaciones basadas en la Constitución del 91. Al contrario, la octava conferencia de esa guerrilla (1993) privilegió una vez más la guerra, rompió todo compromiso con la tesis de combinación de las formas de lucha y abandonó el fomento de las formas legales. El impacto sobre el PC fue inmediato. En las Memorias de la II Conferencia Ideológica Nacional del PCC, de septiembre de 2004, aparecidas en folleto, se consignaba que “la lucha armada es la forma más elevada de confrontación al régimen político y militar de la oligarquía y representa un importante acumulado revolucionario, lo que lo convierte en un factor imprescindible para los cambios sociopolíticos en nuestro país. Esto jamás ha estado en duda desde nuestra posición” (PCC, 2004). Inclusive el documento apoyaba la presencia de sectores armados ilegales en las luchas pacíficas y de masas. Así de graves han sido los bandazos del PC ante las fluctuantes determinaciones de la guerrilla que él mismo ayudó a nacer.

Había, pues, inconsecuencia por parte de la dirección comunista, que condenó la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985 pero no la destrucción del club El Nogal por las Farc en 2002 ni los ataques con bombas a poblados indígenas del Cauca en 2005. De la aventura del M-19 dijo que había sido “un golpe contra el conjunto de la lucha armada popular y contra el proceso de movilización de las masas por sus exigencias y por la apertura democrática”.⁵ Cuando el ELN y después el M-19 ponían bombas, quemaban buses y otras fechorías, el PC señalaba esas acciones como terroristas. Ahora su actitud fue la de callar si las mismas tareas eran ejecutadas por las Farc, que han ocasionado daños mucho más severos contra la población y los recursos naturales,

⁵ Alvaro Vásquez, *Margen Izquierda*, No. 5, noviembre-diciembre de 1985, p. 4.

como es la destrucción de recintos ocupados por comunidades indefensas, el ataque a pueblos pacíficos desde las montañas y la utilización de cilindros explosivos contra edificios ocupados por personas indefensas. Ese tipo de acciones los emparentaba con el Ejército y los paramilitares, sin escapatoria posible. Pero ya el mal estaba en camino y no se detendría hasta el día de hoy. El grueso de la población, que permanecía al margen del conflicto armado, comenzó a retirar las simpatías que pudiese haber abrigado por la retórica guerrillera. “Las primeras demostraciones masivas contra la guerrilla” se presentaron en la Costa Atlántica y el Meta y fueron suscitadas por los ataques a las torres de interconexión eléctrica (García, 2006).

La idea de que el pueblo colombiano quiere la paz y no la guerra ha sido siempre un criterio público del PCC. En 1989, año de sonoros éxitos militares de las Farc, Vieira decía: “la bandera de la paz es la que congrega al pueblo colombiano; éste no quiere la guerra” (Harnecker, 1989, 51). Sin embargo, en tanto que el conjunto de los partidos comunistas latinoamericanos que en una u otra coyuntura se relacionaron con formas de lucha armada cancelaron ese camino desde hace tiempos, la agrupación colombiana persiste en él medio siglo después del XX congreso soviético. El informe político presentado al pleno del CC de abril de 2006, que se permitió una velada censura de los métodos autoritarios al consignar que “el paro armado de las Farc (...) tuvo hechos lamentables que afectaron a civiles y no fue decidido con las masas” (*Voz*, 19 de abril de 2006, 9), mostró en seguida parte de los efectos que la prolongación de la guerra interna del país ha tenido sobre la marcha del partido. En referencia a los comicios ciudadanos de 2006, el documento afirma que “En el campo la votación ha disminuido dramáticamente. Hemos insistido en que el indicador principal que aportan los resultados es la pérdida o el debilitamiento del vínculo partido-masas y que esto representa una falla estructural de la organización, que exige un estudio cuidadoso por el colectivo y medidas correctivas de fondo” (*ibid.*, 10). Paradójicamente, el documento presentado a la reunión plenaria de la dirección realizada cinco meses después (28 y 29 de septiembre de 2006) se complace en constatar que en el V Congreso de la CUT (agosto de 2006) hubiera fracasado “la pretensión de arrastrar a la central a una posición contrainsurgente, con el

pretexto de condenar la violencia y el terrorismo, lo que habría significado un espaldarazo a la ‘seguridad democrática’ de Uribe y a la prédica ‘antiterrorista’ de Bush” (*Voz*, 11 de octubre de 2006, 3). Contrariamente, el congreso del PDA (noviembre 30 de 2006), por boca de su presidente Carlos Gaviria y de su secretario general Antonio Navarro, declaró el rechazo de la lucha armada y afirmó que el Polo era ajeno a esa forma de confrontación.

Sobre la labor social del partido

Naturalmente, el centro de interés de las izquierdas es la lucha política por el poder más que el debate sobre la economía nacional o los elementos culturales de la nación. Esta es la primera dificultad para abordar la concepción universal de vida buena que manejó el Partido Comunista en su esfuerzo por conquistar el apoyo de la población. El tratamiento del concepto está afianzado en la denuncia pública que surge de los sectores de la población mayormente afectados por el desarrollo capitalista del país. El enfoque de la subordinación social, sin embargo, no es crítico. En el caso del PCC la propaganda partidaria se limita a consignar, enriquecer e impulsar las denuncias sociales, dando por sentada su justeza. En su apreciación de los problemas sindicales prima la visión partidaria y no la clasista. El reflejo de los problemas de los sectores intelectuales y artísticos es honesto, aunque con carga ideológica (se descalifica la expresión considerada como burguesa o reaccionaria) y con inclinación a la instrumentalización de la protesta social. Aunque las organizaciones de base barriales y veredales se relacionaban de hecho con los problemas sociales locales y en algunos casos importantes (viviendistas de Cali; actividad de la Central Nacional Provivienda en Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta y otros lugares; proyectos de mejoras urbanas alrededor de sindicatos petroleros y mineros en Magdalena Medio, Antioquia, Cesar, Guajira y otros lugares, etc.) permitieron a la militancia perfeccionar su conocimiento de la situación de los sectores populares, la mayor dificultad para la formación partidaria en el concepto de lucha por el bienestar de la población trabajadora residió en su menosprecio e indiferencia ante

los problemas de la organización y dirección del Estado. Eso incidió no solo internamente (fracaso administrativo de las empresas partidarias), sino sobre todo externamente: ignorancia y menosprecio del arte de administrar los bienes y los asuntos del Estado y de las comunidades, que tanto gravitó sobre ediles, concejales y diputados obtenidos por las listas del partido. Lo ilustró en enero de 2007 el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón: “La izquierda no se prepara para gobernar, se prepara para hacer oposición. No conocí en el sindicalismo ni en la izquierda un curso de gobierno, siempre un curso de oposición, pero nunca decir: y si ganamos, ¿qué hacemos?” (*El Tiempo*, 7 de enero de 2007, 1-7).

Con todo eso, fue allí, en la educación del pueblo, donde la izquierda marxista entró a desempeñar su papel político independiente, aunque no por completo ajeno a las prácticas tradicionales. El neoliberalismo como política de los monopolios internacionales fue denunciado por el PC desde 1967 y especialmente en los años 70 y 80 (*Documentos Políticos*, 1980, No. 144-145 y PCC, 1980). El partido señalaba sus peligros en aspectos como el abandono de sus deberes sociales por parte del Estado, el manejo privado de las empresas y los servicios públicos y la entrega de mayor porción de la economía nacional al capital extranjero. El debate promovido por la reforma agraria de Lleras Restrepo puso de manifiesto la incapacidad del gobierno para aplicar un programa transformador de la propiedad agraria y de ahí en adelante la Ley 1ª de 1968 solo fue objeto de reformas que revivieron el arrendamiento y la aparcería, favorables a latifundistas y grandes empresarios del agro porque se apoyaban en el concepto elástico de tierras “adecuadamente explotadas”. Solo a partir de las grandes tomas de tierras que abarcaron buena parte del decenio de 1970 y de los avances electorales de los comunistas y sus aliados en la década siguiente, éstos estuvieron en condiciones de presentar en el Congreso Nacional un nuevo proyecto de reforma elaborado por la Coordinadora de Organizaciones Agrarias, que enriquecía el similar de procedencia gubernamental, aunque ninguno de los dos fue discutido realmente en la corporación y ambos fueron saboteados por la mayoría liberal-conservadora. Lo mismo pasó con las iniciativas presentadas por la izquierda a partir de 1986. Nuevamente, el año siguiente, la

pequeña bancada congresual de la UP puso sobre la mesa de debate un nuevo proyecto, que ampliaba el del liberal Guillermo Alberto González propuesto a fines del 86, y una vez más la derecha mayoritaria del Congreso y el gobierno (presidido por la figura menos retardataria de la época, Barco) procedieron a organizar su fracaso (*Margen Izquierda*, 1987, No. 19, p. 30).

Al respecto, a veces parece que olvidamos nuestro pasado histórico reciente y no recordamos que tuvimos un sector liberal de izquierda que no pensaba igual que los “jefes naturales” de la colectividad. La izquierda no ha estado sola sobre el planeta. La segunda mitad del siglo XIX, bajo gobiernos conservadores, está tachonada de propuestas progresistas de pensadores y líderes políticos liberales y conservadores, y los ensayistas liberales de la primera mitad del siguiente siglo trazaron el camino hacia la modernización de las estructuras económicas y sociales del país. El principal apoyo que encontró Gaitán a su regreso al país luego de sus estudios en Europa fue la reivindicación de tierra de los campesinos y el incipiente movimiento sindical (Ardila, 1984). En las filas liberales de los años 60 y 70 había vocaciones de izquierda, así ellas no fueran tanto de principios como de convicciones personales o de conveniencia política. “Para nadie es un misterio —expresaba Agudelo Villa en los años 60— que por debajo de la hojarasca de disculpas en relación con los motivos por los cuales se ha intentado formar una disidencia, se esconde la oposición de quienes consideran peligrosa la tesis que muchos liberales antioqueños y sobre todo las gentes jóvenes están presionando de que si el liberalismo quiere conservar su vigencia en Colombia tiene que dar pasos más audaces hacia la izquierda para ponerse en consonancia con la evolución contemporánea” (Agudelo, 1969, 86). La disidencia pedía al liberalismo “que su celo por la libertad y la defensa de la persona humana se traduzca en un empeño más decidido y constante por el bienestar de la gente común, de la de bajos ingresos, en los campos de la educación, la salud, la vivienda, la asistencia social, para que podamos avanzar en un proceso de desarrollo acelerado y continuo, son las perturbaciones que generan las hondas desigualdades sociales y el otorgamiento de las oportunidades solo a un grupo reducido de la sociedad” (ibíd.).

La queja de los liberales de izquierda por la prevalencia en las filas del partido de los intereses de la gran propiedad ha sido permanente a lo largo de los años. El divorcio del Partido Liberal de una política popular, progresista, arranca de la desaparición del programa reformista de López Pumarejo a mediados de los años 30, pero solo en los 60 se hizo evidente para todos el tamaño real de la ruptura, que fuera señalado por el sector de avanzada social que todavía sobrevivía en sus filas. “El hecho —advertía ese sector— es que el liberalismo no está dando expresión política a la nueva estructura social que el proceso de industrialización está creando y a las nuevas formas de organización de los intereses y grupos de la sociedad. Un millón de obreros sindicalizados, una inquieta, ambiciosa y vasta promoción universitaria, cerca de 20.000 juntas comunales, 60 gremios de la producción, una creciente clase media de profesionales y técnicos, están prácticamente marginados de la acción política del partido” (ibíd.).

En nuestro medio la oferta de las izquierdas podría entenderse como la participación ciudadana mediante acciones notorias de la población y de sus organizaciones propias, como sindicatos de trabajadores, asociaciones comunales, juntas cívicas, veedurías, etc., en las condiciones de un Estado débil en la guarda de la cosa pública y unas instituciones corporativas excluyentes y cercadas por los intereses de los sectores propietarios. La contribución de los comunistas hay que buscarla en ese terreno, no pretender preguntarles por qué no han “hecho” la revolución que tanto predicán.

No es que los comunistas hayan carecido de concepciones claras y definidas sobre su papel entre la población. Todo lo contrario. El texto de la plataforma de lucha electoral para concejos difundida por el partido en 1987 definía en detalle el escenario de ofertas del PC en el terreno más trajinado por sus dirigentes y activistas: el ámbito local. Participación activa de la comunidad, descentralización del presupuesto, inversiones con prioridad en las necesidades de los sectores más pobres, nuevo tratamiento de la deuda externa, políticas de seguridad social y vigilancia de la población, todo estaba allí contemplado.

Naturalmente, la política reivindicatoria pregonada por los sectores de izquierda, fuera del poder, no tiene impacto sobre el gobierno y la realidad del país sino a través de posiciones inducidas en organizaciones sociales (organismos de representación popular, sindicatos, juntas de acción popular, cooperativas, asociaciones, comités barriales, etc.). En los gobiernos locales (excepción hecha de Bogotá y algunos municipios del Valle del Cauca y de otros departamentos) la plataforma de lucha resultaba irrelevante, entre otras cosas porque la izquierda era absorbida por la maquinaria clientelista tradicional o rivalizaba con ella en vicios burocráticos y corrupción administrativa (en el caso de Arauca, por ejemplo). Solo restaba lo poco que lograba extraerse de los cuerpos de representación popular, de aplastante mayoría de derechas. La estrechez política de algunos voceros de la izquierda obraba igualmente en la agilidad para aprovechar su posición en las corporaciones públicas. En el informe político al XIII Congreso del partido se afirmaba que “Todavía hay en muchas partes compañeros que vienen actuando en concejos y asambleas desde hace años, pero su actitud de oposición a todo trance y contra todo los aísla y les impide trabajar por los intereses de las masas” (*Documentos Políticos*, 1980, No. 144-145, p. 74). Los dirigentes de izquierda tienen pavor de ser sorprendidos apoyando una medida justa y útil del gobierno o de los sectores políticos tradicionales, y lo mismo pasa con los sindicatos de izquierda.

Los círculos dirigentes, a la vez, mostraban espanto por las propuestas de gobierno local que adelantaba la izquierda cuando apenas estaba iniciándose la experiencia de los cuerpos ejecutivos de elección popular. Pero no había tal. La experiencia de lucha de los comunistas, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, mostró que la gente desposeída no estaba interesada en eliminar el derecho de propiedad privada, que no quería que le “regalaran” la tierra, y tampoco invadirla y no pagarla o eludir el pago de los servicios públicos. Las familias buscaban cumplir las normas de la propiedad impuestas por el Estado, porque sabían que esa era la única manera de ingresar en el circuito económico y social dominante. No era evadiéndolo o desconociéndolo, sino exigiendo el derecho de participar en él. Desde la época de las tomas de tierras

de las haciendas y latifundios en los años 20 y 30 del siglo pasado los campesinos desposeídos propusieron siempre la compra de la tierra para hacerse al título jurídico de la misma y preservar sus derechos en el futuro. La idea liberal de expropiación de tierras ociosas incluyó siempre la demanda campesina de obtener el título de las parcelas. Esa es la experiencia de las invasiones de tierra en diversas regiones del país y tuvimos ocasión de constatarlo personalmente en los inicios de la colonización de regiones como Medellín del Ariari, El Castillo, Cartagena del Chairá y El Paujil. En todos los casos la población recién asentada en esos territorios, privada de toda ayuda institucional, buscaba afanosamente llamar la atención del Estado para encontrar amparo jurídico a fin de poder contratar créditos y participar en programas de desarrollo regional. Y ocurría así porque desposeídos y propietarios pobres piensan con mentalidad de propietarios: quieren títulos de propiedad para poder adelantar mejoras, vender, revender, recibir subsidios estatales, negociar con bancos, instalar servicios públicos domiciliarios, etc. El dirigente comunista y pedagogo Nicolás Buenaventura escribía sobre la experiencia de la lucha de la población caleña por la tierra urbana en los 50: “Las invasiones legalizadas son una forma de lucha peculiar que consiste, como se entiende, en combinar la acción legal con la ilegal: por medio de la posesión violenta se presiona la titulación de la tierra. Nuestro partido no ha comprendido bien el carácter especial de este procedimiento. Cuando se ha participado en las invasiones se ha creído que la toma de la tierra es el objeto, es el fin de la acción, y por eso en cuanto llega la hora de pagar la tierra, los camaradas siempre nos empeñamos en convencer a la gente de que no pague. Pero la gente se desentiende sistemáticamente de esta orientación del partido y siempre nos vuelve a ocurrir lo mismo: tenemos que aceptar al final el sistema de las compras y correr inclusive a patrocinarlas, para no quedarnos aislados de la gente (...) Las acciones populares espontáneas presionan las soluciones legales y las desarrollan (...) la toma de la tierra, en lugar de ser un fin en sí misma, se convirtió en un medio, en un rodeo para la compra de la tierra en condiciones favorables” (*Documentos Políticos*, 1958, No. 12, p. 19)⁶.

⁶ Ver además entrevista hecha a Nicolás Buenaventura para este trabajo.

El problema para la izquierda es que el sistema de gobierno ha rodeado la gran propiedad de fortalezas aparentemente inexpugnables. Adelantar políticas públicas progresistas desde los puestos de representación popular es una tarea complicada y de nunca acabar. La reforma de 1968 arrebató la iniciativa del gasto público a concejos, asambleas y Congreso y la aglutinó en el poder ejecutivo. La primera elección popular de los alcaldes se produjo apenas en marzo de 1988 y la de gobernadores debió esperar tres años más. Las bancadas de representación popular solo pueden adelantar intentos de reforma mediante adiciones del presupuesto, y en la rebatiña de los fondos el concejal, de todas las ideologías y tendencias, ampara a su clientela por encima de todo. La organización moderna de los partidos políticos en los órganos colegiados (listas únicas, umbral electoral, bancadas) trata de funcionar penosamente solo a partir de la reforma constitucional de 2003 y todavía está en periodo de prueba. En medio de la repugnante corrupción política reinante en todos los órdenes de la vida nacional, nadie apostaría seriamente por su éxito.

La alternativa de los sectores populares parece ser la de apoyar o rechazar la iniciativa presupuestal del gobierno y los grupos de poder real. Rocío Londoño y Eduardo Pizarro entrevistaron al concejal comunista Carlos Romero a mediados del 82 y le preguntaron: “¿Qué decide autónomamente el concejo con relación a Bogotá?”. Entonces ese cuerpo tenía autonomía para establecer las categorías del empleo y la remuneración de los empleados del Distrito, pero no podía modificar la composición de las juntas directivas de los institutos descentralizados ni controlar la política de empréstitos de esas entidades. Romero afirmó que “una de las causas por las cuales la población no se interesa mayormente por las corporaciones públicas, en especial los concejos municipales, se debe al hecho de que éstos no tienen funciones decisorias” (*Documentos Políticos*, 1958, No. 12, p. 19). Solo la ampliación de la representación popular democrática podría mejorar las cosas; “esperar que el cambio provenga de los concejales oficialistas es una utopía, debido a la interrelación que existe entre estos concejales, el gobierno y los empresarios y contratistas del distrito. Así, por ejemplo, no solo la administración está interesada en de-

terminada política de empréstitos, sino igualmente ciertos concejales, como se demostró con ocasión de la construcción de los puentes en la ciudad. Mil veces insistimos en que se aprobara ese proyecto, estableciendo el monto del empréstito y el límite de intereses, pero no fue posible, debido al cheque en blanco que el oficialismo le entregó al alcalde para realizar este proyecto” (*Documentos Políticos*, 1982, No. 150, p. 52). Cuando todavía no había elección popular de alcaldes el control del concejo era mínimo. El presupuesto era de \$50.000 millones, de los cuales \$42.000 eran manejados por el alcalde y las empresas del Distrito (ibíd., 57).

La misma izquierda no hace un seguimiento de sus actividades. Enredada actualmente en puntos de vista divergentes en torno a las soluciones del inmanejable transporte colectivo urbano de Bogotá, en manos de mafias que se lucran del envejecimiento del equipo, la lentitud del desplazamiento y los bajos ingresos de los asalariados sometidos a la “guerra del centavo” desde los años sesenta, no recuerda que hace un cuarto de siglo los representantes comunistas Gilberto Vieira, José Cardona Hoyos y Gustavo Osorio presentaron al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre reforma del transporte público urbano que establecía un sistema mixto basado en la supeditación del componente privado al público, la eliminación de las empresas afiliadoras intermediarias y el control público de los prestadores del servicio, en un proceso hacia la estatización progresiva de ese servicio (*Documentos Políticos*, 1980, No. 144-145, p. 125).

Desde luego, la izquierda colombiana en su conjunto avanzó en la segunda mitad del siglo XX, en todo sentido, incluido su funcionamiento interno. El error más grande fue haber creído que el sistema capitalista marchaba hacia su extinción fatal y que el ensayo socialista había venido para quedarse. La crisis del capitalismo era concebida como su muerte, no como la expresión de su transitoriedad histórica. Desde que Lenin formuló esa concepción han pasado 108 años, en la sucesión de los cuales el “capitalismo moribundo” fue la frase preferida. Se llamaba crisis general del capitalismo y hasta llegó a ser descrita como dividida en tres etapas: primera guerra mundial, segunda guerra

mundial y aparición del campo socialista, y época de lucha de los dos sistemas, que es la última: allí se produciría la desaparición del colonialismo y el triunfo del socialismo a escala mundial. Así lo concibió la asamblea de 81 partidos comunistas del mundo efectuada en 1960, la más grande reunión de ese tipo que hubo nunca, concebida como respuesta a la división desencadenada por el comunismo chino. Los partidos en el poder en Europa renovaron allí su plan de competir y vencer al capitalismo en el terreno decisivo de la economía, y el partido colombiano, seis años después, difundía los avances de esa competición con estas palabras: “El sistema socialista sigue adelante en su propósito de dejar atrás al sistema capitalista y asciende hacia el próximo objetivo de fabricar la mitad de la producción industrial del mundo. Los países socialistas, en su conjunto, fabrican ya las dos quintas partes de la producción industrial mundial y alcanzan en varios aspectos a los países capitalistas más desarrollados” (PCC, 1966, 9). Desde luego, una vez desencadenada la crisis económica del “socialismo real”, los partidos aludidos nunca admitieron que habían perdido la competencia. Esa confesión se las arrancó la inmensa movilización popular que dio en tierra con los gobiernos, uno tras otro, entre 1989 y 1993.

¿Por qué, pese a tantas lecciones de la vida, la izquierda colombiana no ha podido acceder a los espacios de coherencia y certidumbre que desde hace rato han ganado en el pueblo y en la opinión internacional las acciones de la izquierda en los países del Cono Sur, Bolivia, Venezuela, Ecuador o Perú? En nuestro criterio, porque se atraviesa el factor violencia, sin parangón en América Latina: la guerra interna impuesta a la población y con la cual conviven forzosamente amplios sectores sociales al lado de los usufructuarios del empleo de la fuerza; además, en el caso del Partido Comunista, su amarre al empleo de las formas de lucha armadas como parte de la estrategia hacia la toma del poder. Esa organización lo ha afirmado repetidamente: el PCC no tiene mayores distancias ideológicas ni políticas con la lucha armada popular, a la que atribuye legitimidad y justeza como elemento de fuerza impuesto al pueblo por la violencia del Estado y las clases dominantes. Las amenazas para el partido, según palabras de sus dirigentes y toda su práctica cotidiana,

proviene de la derecha, que para el partido se extiende desde las actuaciones del “fascismo” criollo hasta las de los reinsertados a la vida pacífica y los que se atreven a criticar públicamente las posiciones comunistas, sea quien fuere, en un espectro de malquerencias que va desde el consejero José Obdulio Gaviria, el ex ministro Fernando Londoño o el periodista Plinio Apuleyo hasta Saramago, García Márquez o Héctor Abad Gómez y su hijo Abad Faciolince. El partido no quiere saber nada de prensa socialista libre o independencia crítica de los escritores e investigadores de izquierda, y no tolera dudas públicas sobre los procesos de izquierda que avanzan en países como Cuba, Nicaragua o Venezuela. En materia ideológica y política todo debe cambiar, menos las posiciones propias, parece ser la consigna.

Es posible que los sucesos políticos latinoamericanos hayan tenido muy poca influencia sobre las experiencias de lucha del pueblo colombiano. En cierta manera, en las décadas contemporáneas, Colombia ha ido a contrapelo del resto de naciones hermanas. Durante los años 50, 60 y la mitad de los 70 el país mantuvo tasas de desarrollo económico que no ha vuelto a conocer, entretanto que no pocos países del continente soportaban serios altibajos de su economía; a partir de los años 90 y hasta 2006 nuestra economía no levantó la cabeza, mientras en el vecindario se prolongaban los años de altas tasas de desarrollo en Venezuela, Perú, Argentina, Uruguay y Chile, por lo menos. Fuimos el único país latinoamericano que envió soldados a la guerra de Corea y el único que se distanció de la nación argentina en el conflicto de las Malvinas. Y mientras nosotros nos sumergimos en las honduras de una república paramilitar con conflicto armado interno de cuatro decenios, en el resto de naciones vecinas se escalan importantes posiciones de unidad democrática, dirigidas a desmontar las construcciones de sumisión impuestas por el capital norteamericano, principal factor de apoyo de los círculos gobernantes colombianos.

El debate de la democracia

La nueva izquierda surgida del derrumbe del “socialismo real” plantea una reforma dentro del capitalismo basada en la descentralización de la administración pública, el desarrollo regional y local, el fomento y defensa de las organizaciones populares y democráticas y el fortalecimiento de la sociedad civil. La democracia, para esa izquierda, se ha convertido en asunto central de toda su práctica política. El proyecto del “socialismo real” demostró trágicamente que las sociedades contemporáneas –en primer lugar las occidentales, más expuestas al debate público– no soportan la construcción de una nueva sociedad productora sin la presencia de expresiones democráticas y libertades públicas amplias, ajenas al monopolio del Estado por formas de desarrollo intolerantes. No hay desarrollo sin libertades públicas, dice la lección del “socialismo real”, que fue ni más ni menos que el ensayo general más acabado de sociedad igualitaria que ha conocido la humanidad. La democracia y la lucha democrática son un asunto central para la izquierda porque, como afirma Utzig en referencia al experimento de los países socialistas, “la supresión de la democracia y de la libertad pueden transformar un proyecto con pretensiones emancipadoras en una pesadilla totalitaria” (*Nueva Sociedad*, 1988, No. 157, p. 111). Esas mismas políticas públicas de carácter social que la globalización lanzó a las tinieblas exteriores.

En contraste, la nueva izquierda que apareció en el mundo a partir de la escisión del campo socialista en 1960 esgrimía tesis aparentemente más radicales, que poco tenían que ver con la democracia y estaban basadas en la lucha por el derrumbamiento del sistema capitalista por la vía armada o, en todo caso, lejos de la vía pacífica que pregona el conjunto del movimiento comunista internacional bajo la égida del Pcus y la Unión Soviética. El papel asumido por los partidos comunistas fue entonces el de preservar supuestamente los dogmas marxistas y caminar al unísono con un dechado de desarrollo social, político y cultural encarnado por los países socialistas de Europa y en particular la Urss. A todos los partidos proletarios comprometidos con la dirección de Moscú les apareció enton-

ces un puesto de combate frente a un enemigo doble: el capitalismo y sus “socios” los maoístas.

El factor de la lucha democrática tiene enorme importancia para nuestro país porque al respecto Colombia tiene poco que aportar. La democracia y la lucha por la democracia que, hay que repetirlo, es un valor burgués, nacido en el seno de la sociedad de clases más acabada— han contado con poco espacio de acción entre nosotros. Durante cuatro decenios hemos estado en el centro de la atención continental a causa de nuestro prolongado camino de luchas sociales violentas, que no dan origen a nuevas expresiones de participación ciudadana sino que ahondan y descomponen la controversia social en sus expresiones más criminales. Nos matamos más, ponemos más cifras de desplazados forzosos y llevamos marcas mundiales de intolerancia sindical y minado de suelos pero no figuramos en los mapas de los movimientos sociales latinoamericanos. Colombia aparece al margen de los estudios sobre desarrollo del movimiento político y social latinoamericano del momento. Poco o nada hay que tenga trascendencia en el listado de las luchas sociales del continente y en la contribución de las fuerzas de izquierda. Se puede prescindir (y de hecho se prescinde) de la historia social colombiana sin que se altere el mapa de las luchas sociales democráticas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. La guerrilla no está en la lista y ella es lo único realmente resaltante y original que presenta Colombia en el curso de cincuenta años. A partir de los años 80, mientras aquí había feroz guerra de guerrillas y paramilitares y plan de exterminio de la facción de izquierda que se atrevió a desafiar la muerte y a poner en marcha un proyecto de lucha política civil, en el resto del continente nacían y se desarrollaban nuevas expresiones de la izquierda en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua, Venezuela e incluso la siempre rezagada México. Lo que muestra esa casi invisible presencia del curso de la lucha social colombiana entre sus pares es que los objetivos de la actual izquierda son más amplios y más cercanos a los intereses populares que los de la insurgencia de los años sesenta, sesgados —y cegados— por el convencimiento de que la utopía socialista se había vuelto realidad.

Pero en materia de libertades públicas la izquierda colombiana contemporánea no está inaugurando nada. La clase dirigente conocía los problemas económicos del país y los líderes liberales los exponían en detalle y eran conscientes de soluciones que en su inmensa mayoría estaban inscritas en las propuestas de la izquierda, como atestiguan el documento presentado por los principales dirigentes liberales de esa tendencia al Encuentro Nacional del Liberalismo (Bogotá, julio de 1968) y la Declaración de Tisquesusa, aprobada en esa reunión. No se trataba de un problema de indecisión del Partido Liberal sino de su imposibilidad política para hacer los cambios que pregonaba.

El gran error de los partidos comunistas –y del colombiano, para nuestro debate– fue el de no haber alcanzado una mirada flexible, objetiva, tolerante de la idea y la práctica del socialismo. No permitir la más pequeña observación pública sobre el régimen socialista de Europa oriental, sobre los PC o el PCC, a pesar de conocer sus falencias y sus grandes manchas. Cerrar su prensa y su espacio de investigación social a cualquier observación crítica del programa y la práctica social de los PC. El partido no tenía distancia de los fenómenos que estudiaba y esto es funesto para cualquier práctica social. Mientras en los países socialistas no había libertad de voto, prensa, educación, manifestación, ni siquiera de desplazamiento de los ciudadanos en su propio territorio nacional, y tampoco libertad de expresión literaria y artística, aquí aflábamos la cuchilla de la lucha por libertades y derechos democráticos. Aquí condenábamos la pena de muerte pero allá había pena de muerte por disidencia política. El socialista era un mundo silencioso, sin crítica social y sin verdad investigativa social. Nosotros lo sabíamos y lo callábamos porque estábamos amarrados a una práctica social que era la negación de la que pregonábamos para el país.

Resultaba fatal que el paradigma de Estado democrático fuera el Estado-policía de los países socialistas y especialmente el de la Urss, que era una sociedad igualitaria a la cual el dueño de casa no le daba permiso de cargar la llave de la puerta. Todo se facilitó para los libertadores de la ignominia

zarista, porque el socialismo se implantó por la fuerza en el seno de una sociedad que no había conocido la democracia siquiera recortada del régimen burgués. Mucha gente llenó el estómago por primera vez en su vida y conoció la educación, el servicio de salud pública gratuito y la cultura, y no estaba en condiciones de apreciar en toda su grave magnitud la ausencia de libertades públicas.

Pero la construcción de una sociedad igualitaria, socialista, en la segunda mitad del siglo XX no podía ser enfocada como la de inicios de ese siglo en Rusia: crear un frente social y hacerlo respetar de sus enemigos externos que lo acosaban y querían destruirlo, para lo cual era forzoso sacrificar la democracia y con ella las ventajas de la igualdad social en el terreno político, civil, social. No puede ser una “democracia” de guerra contra el resto del mundo. Tiene que someterse a las eventualidades de la oposición política, la libre participación de las ideas y los partidos y el voto universal sin limitaciones, así ponga en riesgo su existencia⁷.

No hay que olvidar que una buena porción de los cambios políticos impulsados por las izquierdas latinoamericanas en la segunda mitad del siglo pasado ocurrió sin el concurso de los partidos comunistas y a veces a pesar de ellos. Nuestro PC fue más hostil que tolerante de la carrera política de Gaitán —a quien tildó de fascista, mientras paradójicamente no titubeó en aliarse con el rojaspinillismo—, y ese tipo de actitudes se replicó en los casos de los comunistas argentinos y el peronismo y de los comunistas mexicanos y el PRD. El Movimiento 26 de Julio —que para los comunistas del mundo ostentaba la mácula de ser un movimiento de las clases medias y no del proletariado— ganó el apoyo del pueblo cubano ante el opacamiento y desconfianza del Partido Socialista Popular (comunista), proclive al reformismo norteamericano. En Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional se desarrolla exitosa-

⁷ En entrevista concedida al autor de estas notas, Gilberto Vieira admitió que la Cuba de Castro nunca aceptaría la participación electoral libre de partidos en la isla porque ellos no querían repetir la experiencia hecha por los sandinistas en Nicaragua, como producto de la cual habían perdido el poder.

mente ante la hostilidad del Partido Socialista (comunista) de ese país, que era la voz cantante del pueblo nicaragüense en los foros de los partidos comunistas del mundo. El Partido de los Trabajadores recorre un largo camino hacia el poder sin mayor contribución de los comunistas brasileños. La preservación del orden político en el seno de la Unidad Popular chilena la garantizó Allende sustrayéndose a la rivalidad invencible de socialistas y comunistas. Tampoco la izquierda latinoamericana gana mayor cosa al buscar alianzas políticas con los partidos socialdemócratas, muchos de ellos partidarios de la exclusión de los comunistas, proclives a pactos con la derecha y enemigos de crear un frente económico y político del continente del sur frente a Estados Unidos y las empresas multinacionales.

El sometimiento de los comunistas latinoamericanos a la égida de Moscú obstaculizó seriamente los esfuerzos hechos en el seno de los partidos para abrir camino ancho a las prácticas democráticas. En diciembre de 1980, en plena crisis del poder socialista en Polonia y para estar a tono con la información que emanaba del Pcus, el congreso del PCC solo aceptaba “dificultades” en la situación interna de ese país, y nueve años atrás, sobre el caso de Checoslovaquia, el informe político al 11º congreso del partido (abril de 1972) había estampado esta manifestación: “cuando (...) las tropas del Tratado de Varsovia entraron en Checoslovaquia para salvar las conquistas del socialismo gravemente amenazadas, el colectivo de nuestro partido comprendió plenamente el contenido de clase de esa acción solidaria internacional” (PCC, 1971, 15).

Pero nada fue más patético que la desolación de los comunistas colombianos frente a la desaparición del “campo socialista”. En acto de homenaje al 50º aniversario de la revolución soviética cumplido en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá en noviembre de 1987 —menos de dos años antes del derrumbe del Muro de Berlín—, el alto miembro del Comité Central comunista, Manuel Cepeda, había advertido: “En Colombia críticos vitalicios de la Urss aseguran que al denunciar el dogmatismo, el burocratismo, el conservadurismo y el freno a la revolución se irá a pique el poder soviético. ¿Por qué se preocupan

tanto? Este tipo de fábulas infantiles han estado contándolas desde 1917 y lo cierto es que el poder soviético está cada día más joven y revolucionario” (*Margen Izquierda*, 1987, No. 20, p. 5). Todos creíamos lo mismo. No teníamos criterios propios, y todavía habríamos seguido dando tantos otros tumbos cuantos ordenara el Pcus dar. Pasado el desastre, no pocos profesores universitarios escribieron sobre las bondades del cambio ocurrido en la Urss y el Pcus después de haber estudiado por años en los países socialistas y haber permanecido en silencio. Naturalmente, no habrían podido hacerlo oportunamente sin escapar a las represalias que inmediatamente habrían tomado contra ellos, allá y acá.

Pocos años antes de caer asesinado por el Ejército, el dirigente comunista Miller Chacón, egresado de la Universidad Libre y hombre a prueba de cualquier veleidad reformista, afirmaba sobre los efectos de la *perestroika*: “Vale la pena preguntarse si los cambios que ocurren hoy en la Unión Soviética no han sido sorprendidos para nosotros; acostumbrados como hemos estado siempre a descalificar, por antisocialistas, antisoviéticas o productos de manipulaciones del imperialismo, toda (sic) información o estudio crítico de la realidad del socialismo; acostumbrados a conocer la realidad por una sola fuente: la oficial, que siempre o hasta hace poco mostraba una sociedad distinta a la que se nos presenta hoy por los nuevos dirigentes. Hoy, muchas cosas que aprendimos y defendimos como verdades han sido revaluadas o tachadas de falsas o aparentes” (*Margen Izquierda*, 1988, No. 27, p. 15). Más adelante señalaba: “Lo que está ocurriendo debe enseñarnos a ser más reflexivos y críticos respecto a todos los fenómenos. Nada debemos aceptar sin controversia y análisis y, al menos, tenemos que cuidarnos de no descalificar a los que mantienen ciertas dudas o no comparten ciertos hechos. Los nuevos planteamientos de la Urss han dado un vuelco a muchos conceptos y un golpe demoledor al seguidismo político, al culto casi religioso a la Unión Soviética. Han abierto un amplio espacio al desarrollo de las variantes del socialismo y al enriquecimiento del marxismo y desde luego refrescarán a los partidos comunistas” (ibíd.).

La crisis del modelo socialista fue reconocida formalmente por el partido colombiano solo a partir de 1991, cuando no dejó de recordar, como manera de consolar y consolarse, que el socialismo seguía construyéndose en China, Vietnam y Cuba (lo cual hoy, ciertamente, no corresponde a la verdad). Entonces los documentos partidarios empezaron a aceptar que antes del desastre también se habían presentado crisis en el socialismo y que “la crisis actual del movimiento revolucionario, del modelo socialista, es más profunda y más general que las crisis anteriores”, como sostuvo G. Vieira en una conferencia nacional destinada a la elaboración de un nuevo programa del partido (*Voz*, 11 de abril de 1991, 1, separata).

Con motivo de la *perestroika*, la *Revista Internacional*,⁸ órgano teórico e informativo de los partidos comunistas y obreros, se vio precisada a cerrar. Su último número (381-382) apareció en mayo-junio de 1990 y reprodujo textos de diálogos con miembros del CC del Pcus y del Soviet Supremo de la Urss, algunos pertenecientes a la Academia de Ciencias, con posiciones bastante sugestivas. En referencia a los partidos socialdemócratas de Occidente, el miembro del Soviet Supremo Alexandr Korshunov afirmaba: “En fin, los demócratas occidentales, sin consignas ‘revolucionarias’ y sin simbolismos proletarios, supieron tomar del marxismo su esencia y acercarse mucho más que nosotros a la encarnación práctica de las ideas de justicia y protección social (...) Me parece que muchos se equivocan al poner automáticamente signo de igualdad entre la Revolución de Octubre, su proyección humanitaria, y un periodo de nuestra historia verdaderamente aterrador, que se inicia a partir de la segunda mitad de los años 20 y que, en lugar de ser una continuación del gran Octubre, es su negación contrarrevolucionaria (...) Tenemos el poder de los soviets desde 1917, pero solo recientemente nos hemos liberado de una crudelísima dictadura, sin parangón en la historia” (*Problemas*, 1990, No. 381-382, p. 20). Alexander Iákovliev, con puesto en el buró político y el secretariado del CC

⁸ En Colombia se editaba bajo el nombre de *Problemas de la Paz y del Socialismo* (*Problemas*, en los últimos tiempos).

del Pcus, añadía: “El mundo ha cambiado, es irreconocible, mientras que nosotros, desgraciadamente, nos hemos estancado, hemos creado ciertos clisés de fenómenos, conceptos y categorías, y nos hemos acostumbrado a operar con ellos” (ibíd.). Hoy, con las aguas del turbión ya sosegadas, suena como una fantasía que desde los años 60 del siglo pasado los revolucionarios colombianos hubiésemos creído a pie juntillas que estaba cerca el fin del bipartidismo.

No resultó verdadera la afirmación de que el PC es un demiurgo sin el cual no hay revolución social posible en nuestra época. Con el fracaso del modelo de revolución pregonado ya puede sostenerse sin problema que la revolución democrática del mundo contemporáneo no requiere necesariamente al PC. Puede ser otra expresión y en todo caso no será autoritaria ni centralista y férreamente jerarquizada. Pero, nos preguntamos: ¿tantos esfuerzos a lo largo de setenta años para que, al final, la población trabajadora escandinava –sin necesidad de revolución proletaria victoriosa y con desocupación subsidiada– estuviese en condiciones sociales y políticas superiores a las de los países bajo el socialismo triunfante?

Bibliografía

Agudelo Villa, Hernando, 1969, *La alternativa: un liberalismo de izquierda*, Bogotá, Tercer Mundo Ediciones,

Ardila Duarte, Benjamín, 1984, *Gaitán y la izquierda liberal*, Bogotá, Fondo de Publicaciones de la Cámara de Representantes.

García, Mauricio, 2006. “¿Hay un movimiento por la paz en Colombia?”, Tesis de doctorado, Copia del original.

Harnecker, Marta, 1989, *Colombia: Combinación de todas las formas de lucha*, México, Universidad obrera de México.

PCC, 1952, “Resolución Política del VII Congreso del PCC”, 13 de abril, mimeo.

-----, 1956a, “Informe al XIX Pleno”, mimeo

-----, 1956b, “Resolución política del XIX pleno del PCC”, mimeo.

-----, 1966, “Por el Frente Patriótico de Liberación (Documentos del X congreso del PC de Colombia)”, Bogotá.

-----, 1971, “Por la Unidad Obrera y Popular. Documentos del XI Congreso del PCC”, diciembre.

-----, 1980, “Informe al XIII Congreso del PC”, diciembre.

-----, 1993 “Pleno del Comité Central”, enero, en *Separata de Voz*, sin fecha.

-----, 2004, “Forjar la alternativa en la batalla de ideas, Memorias de la II Conferencia Ideológica Nacional del PCC”, septiembre, folleto sin fecha.

Revistas y periódicos

Documentos Políticos, 1956-1984, números 1-158.

El Tiempo, 2007.

Estudios Marxistas, 1975, número 10.

Margen Izquierda, 1985-1989, números 1-41.

Nueva Sociedad, 1988, número 157.

Problemas, 1990, No. 381-382.

Voz Proletaria, 1969.

Voz, 1991-2006,